

INTERPONGO RECURSO DE CASACIÓN.

EXCMA. CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – SALA II

JUICIO: DELGADO DE PIZZICANELA BLASI NELLY C/ PROVINCIA DE TUCUMAN S/AMPARO N° 268/17

MIRTA ADRIANA AVILA, por la representación que ejerzo en autos, a V.E. respetuosamente digo:

En tiempo y forma oportuna interpongo recurso de casación en contra de la sentencia de fecha 23/03/2018, dictada por la Excma. Cámara Contencioso Administrativo - Sala II, depositada en casillero de notificaciones N° 722, en fecha 27-03-18 HORAS 19,00.

Con respecto al examen de admisibilidad del recurso interpuesto, cabe adelantar que, de acuerdo con los argumentos que se expondrán a continuación, V.E. podrá apreciar que el planteo de este remedio extraordinario de impugnación cumple con las condiciones necesarias requeridas por el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (Texto Consolidado por Ley n° 8.240). En efecto se interpone en tiempo oportuno (Art. 751); contra una sentencia definitiva (Art. 748 inc.1°); la cuestión debatida asume gravedad institucional (Art.748 inc.2°); se invoca violación a normas de derecho (Art. 750); respetando las pautas contenidas en el art. 751; y habiéndose producido el depósito judicial a la orden de la Corte Suprema de Justicia como lo prevé el art. 752.

1.- La sentencia impugnada.

La sentencia impugnada resolvió: "II- HACER LUGAR, a la acción de amparo entablada por NELLY DELGADO DE PIZZICANELA BLASSI y, en consecuencia, ORDENAR a la PROVINCIA DE TUCUMAN observar fielmente en lo sucesivo a la movilidad porcentual acordada para el haber de su pensión;..., a partir de que quede firme el presente pronunciamiento y dentro del plazo del artículo 80 del CPA. III RECHAZAR por INADMISIBLE, la excepción de prescripción esgrimida por la Provincia de Tucumán. IV COSTAS, a la demandada.

Para resolver como lo hizo consideró lo siguiente:

"En el caso de autos, la actora Nelly Delgado de Pizzicanella Blassi alegó la violación de su derecho adquirido a percibir el haber previsional con la movilidad y porcentualidad en los términos en que le fue concedido originariamente el beneficio de pensión, circunstancia que a su entender conculca las garantías y derechos consagrados en los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.

En el caso citado precedentemente, de circunstancias que en cierto modo resultan analogables a las del que aquí nos ocupa, el Alto Tribunal local sostuvo que "la pretensión incoada en autos persigue que se haga cesar la actual restricción y lesión sobre los derechos y garantías que, como jubilado, le asisten, provocadas con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas por parte del Estado Provincial, al omitir el cumplimiento efectivo en el pago de sus haberes jubilatorios de la movilidad y porcentualidad contenidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que le fueran reconocidas al amparo de la ley nba 5597. Es decir, que en el sub iudice no se procura el cobro retroactivo de diferencias previsionales ni la confección, por ende, de la planilla de liquidación respectiva, lo que de por sí denota una marcada diferencia con relación a aquellos otros procesos en los que en la demanda también se incluye una pretensión de este tipo; supuesto éste en el que sí podría llegar a ser cuestionable el empleo de la vía del amparo (...). Sentado ello, y

teniendo presente las demás consideraciones esgrimidas ut supra, se infiere con meridiana claridad que la cuestión sobre la que se controvierte en autos no requiere mayor debate o prueba ni tampoco exhibe la dificultad que pregonaba la agravada. En puridad, no se está frente a un conflicto que exhiba una complejidad tal que no pueda ser resuelto por la vía del amparo, o que requiera mayor aporte de material fáctico o de trámites probatorios que no sean los tomados en consideración por la Cámara.”

“...además de no haber sido expresamente desconocido por la demandada, el carácter de pensionada provincial transferida que ostenta la actora se encuentra suficientemente acreditado en las constancias de autos.”

“...resulta procedente y así debe ser declarado. Como consecuencia de ello, la demandada deberá, en fiel observancia de los derechos que le asisten a la actora a gozar de la movilidad porcentual de su haber de pensión -fijado en relación al haber de la jubilación de su difunto esposo-, respetar en lo sucesivo el porcentaje del 75% sobre el 82% móvil acordado en la resolución de origen del beneficio, abonándole las sumas correspondientes siempre que se mantenga y verifique la apuntada diferencia entre la remuneración del activo -en su debida proporción- y el haber del pasivo, dentro del plazo establecido en el artículo 80 del CPA.” (la negrilla me pertenece).

Como expondré a continuación, los fundamentos del fallo son sólo aparentes. Además, la solución a la que arriba resulta ser contraria a normas vigentes de la provincia que no han sido cuestionadas y, tampoco declaradas inaplicables o inconstitucionales.

2.- Requisito de admisibilidad: Sentencia definitiva.

Conforme surge del art. 748 inc. 1º del C.P.C.C.T. “El recurso de casación sólo corresponderá: a) Contra las sentencias definitivas pronunciadas por las Cámaras, equiparándose también como tales a las que, dictadas en una cuestión incidental, terminen con el pleito o hagan imposible su continuación.”

En el caso de autos, estamos frente a una sentencia que cumple con el requisito de ser “definitiva”, por lo que corresponde se tenga por cumplido ese recaudo formal de admisibilidad.

3.- Gravedad institucional.

La sentencia recurrida no aplica, arbitrariamente, la ley n° 8851 que regula el mecanismo de pago de obligaciones del Estado reconocidas en sede judicial. Además resuelve sin atender argumentos y pruebas conducentes para la adecuada solución de la litis. El razonamiento vertido por el Tribunal en los puntos impugnados excede notoriamente la situación jurídica subjetiva discutida por las partes en litigio “para proyectarse sobre la buena marcha de las instituciones” (CSJN, Fallos: 300-417) y la división del ejercicio del poder público (Cf. CSJN, Fallos: 250-699; 292-229; 293-504; 302-742 y 843; 303-1041; 335-2360, entre otros). La cuestión en debate impacta de manera directa e inmediata en la comunidad en su conjunto, por cuanto el tema debatido incide de manera relevante en la organización administrativa-financiera del Estado provincial, al no aplicar sin justificación alguna el mecanismo de pago de parte la deuda provincial, diseñado en ejercicio de prerrogativas públicas legítimas reconocidas por la CN.

Según Palacio, la CSJN ha reputado configurado un supuesto de “gravedad institucional” cuando se trata de “Cuestiones relacionadas con la organización, división y funcionamiento de los poderes” (Cf. Lino Enrique Palacio, *El recurso extraordinario federal. Teoría y*

98

técnica, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2001, 3ª edición ampliada y actualizada, pp. 277-279. CSJN, Fallos: 250-699; 292-229; 293-504; 302-742 y 843; 303-1041; entre otros).

El Tribunal propone en la sentencia una solución que ignora, reitero, injustificadamente, el régimen de inembargabilidad de los fondos públicos, y el orden de prioridad para el pago basado en un estricto criterio cronológico, lo que indudablemente trasciende el interés de las partes litigantes para comprometer seria y gravemente *"la buena marcha de las instituciones"* en su conjunto (Cf. CSJN, Fallos: 300-417).

De acuerdo con el criterio sostenido por la CSJN, *"La existencia de aspectos de gravedad institucional puede justificar la intervención de la Corte superando los ápices procesales frustratorios del control constitucional confiado a ella"* (CSJN, 06/03/2001, "Provincia del Chaco v. Parra de Bosco, Ana M. y otros s/ expropiación", Expte. 6214/99 s/ inhibitoria).

A su turno, la CSJT ha expresado con claridad los alcances de la *"gravedad institucional"* contenida en el inciso 2º del art. 748 del CPCCT, al entender que: "(...) Esta Corte ha delineado la gravedad institucional como existente en aquellos casos que exceden el mero interés particular de los litigantes y atañen también a la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad o puede resultar frustratorio de derechos de naturaleza federal con perturbación en la prestación de servicios públicos (Conf. CSJT, sentencias 393 del 8-7-94; 862 del 29-12-94; 197 del 27-3-96 y 455 del 12-6-97, entre otras) (...) La cuestión que se pretende ingresar a este Tribunal presenta estas características toda vez que, por una decisión jurisdiccional, se ha comprometido el buen orden y la recta administración de justicia - cuya observancia es de indudable raigambre constitucional-, (...) la cuestión controvertida asume gravedad institucional debido a que la errónea interpretación de sus alcances exorbita el mero interés particular de la parte, proyectándose negativamente sobre los intereses de la comunidad (CSJT, 06/12/1999, "Astorga de Coroleu, Marta Iris vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán y Otro s/ Cobro de pesos", sentencia n° 952, año 1999)".

A riesgo de ser reiterativo, la sentencia propone una solución en relación con la desestimación del planteo formulado por el Estado provincial demandado, que compromete seriamente la organización administrativa-financiera, sus potestades y sus cometidos públicos, en claro exceso del interés individual de las partes litigantes y con afectación directa del interés de la comunidad en su conjunto (CSJN, Fallos: 307-1994; 323-3075; 327-1603; 328-900; 333-1023, entre otros), por lo que solicite admita el recurso de casación deducido en autos.

4.-Sentencia arbitraria: Vicio "in iuris iudicando". Cuestión exclusiva de la Corte provincial. Violación a normas de derecho.

Conforme lo desarrollado en los puntos que anteceden el presente recurso aparece formalmente admisible por cuanto se deduce contra una sentencia definitiva. No obstante ello, además, el fallo adolece de un vicio que lo descalifica como acto jurisdiccional válido habilitando su revisión por el máximo Tribunal provincial, esto es lo que la doctrina y jurisprudencia ha dado en llamar la "arbitrariedad".

La realidad es que la sentencia ha derivado de la instauración de un "fundamento aparente", ligado de modo estrecho a meras afirmaciones dogmáticas y construcciones conceptuales que atentan contra el Derecho de Propiedad en sentido amplio, la garantía de Defensa en Juicio y el Debido Proceso Legal, violando los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional, el Art. 30 de la Constitución provincial, así como de los arts. 34, 40 y 264 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán.

De ningún modo constituye una derivación razonada del derecho presente. Por el contrario, como se desarrollará más adelante, desvirtúa el contenido del Art. 32 de la ley n° 4611, aplicable al caso.

Tal como lo viene afirmando la Corte Suprema de Justicia provincial, el análisis de la arbitrariedad del fallo recurrido se trata de un vicio "in iuris iudicando" que hace a la procedencia del recurso y no a su admisibilidad. Esto implica que resulta una cuestión de análisis privativo del máximo tribunal provincial.

"Ante los términos de la sentencia denegatoria del recurso de casación, se hace necesario dejar debidamente sentado que la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia, y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tienen entidad suficiente para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJT, 27/4/2010, "Juárez Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 249; 28/10/2010, "Agudo Juan Ángel y otra vs. I.P.S.S.T. s/ Amparo", sentencia N° 820; 28/10/2010, "Argañaraz César Mauricio vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I y F s/ Despido", sentencia N° 822; 17/12/2010, "Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Amparo", sentencia N° 997 del 17/12/2010). Es que, tal como se viene sosteniendo desde esta Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte -al menos en su composición mayoritaria-, la ponderación que el Tribunal de casación hace de la valoración del material fáctico obrante en la causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio -ni "ajeno" ni "excepcional"- del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del órgano a quo (cfr. CSJT, 30/6/2010, "Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 487; 03/5/2011, "Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido", sentencia N° 223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos", sentencia N° 227; 06/5/2011, "Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia N° 237; 11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley International Art S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia N° 252 del 11/5/2011). En ese contexto, además de un exceso, queda en evidencia el yerro cometido por la Cámara en oportunidad de realizar el examen que prevé el artículo 136 del CPL, por cuanto la circunstancia que se considere que no le asiste razón al recurrente en sus objeciones en modo alguno implica que el escrito respectivo incumpla con el requisito de admisibilidad de bastarse a sí mismo. En efecto, la exigencia que consagra la disposición contenida en el inciso 1 del artículo 132 del CPL se satisface cuando -como en la especie- se efectúa una relación completa de los puntos materia de agravio, siendo indiferente a dicho efecto que estos últimos resulten o no procedentes."

El criterio reseñado viene siendo mantenido a lo largo de estos años en forma incólume y puede aplicarse a los diferentes modos en que se presenta la arbitrariedad en una sentencia. Es así que la Corte provincial en un reciente fallo consideró:

"... El escrito recursivo es autosuficiente, y hace una relación de los puntos materia de agravio, apoyada en la pretendida infracción a normas de derecho. Por lo demás, la invocación de arbitrariedad me obliga a guardar coherencia con anteriores votos emitidos y considerar admisible el recurso tentado, pues se encuentra también en juego el criterio

relacionado con la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación como cuestión que, en puridad, hace no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia (y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tiene entidad suficiente para invalidar el acto jurisdiccional), y que el suscripto viene reiteradamente sustentado en anteriores pronunciamientos, entre ellos en sentencia N° 556 de fecha 16/8/2011 recaída in re: "Capozzuco Carlos Ángel vs. Distribuidora Munich s/ Cobro de pesos", y más recientemente in re: "Luna, Sebastián Alfredo y otra vs. Colacioppo Mariel Teresa s/ Pago por consignación". Expte. D5009/06-Q1, y sus citas. Como vengo sosteniendo desde la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, la ponderación que el Tribunal de casación hace de la valoración del material fáctico obrante en la causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio -ni "ajeno" ni "excepcional"- del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del órgano a quo (cfr. CSJT, 30/9/2010, "Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 487; 03/5/2011, "Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido", sentencia N° 223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos", sentencia N° 227; 06/5/2011, "Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia N° 237; 11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley International Art S.A. s/ cobro de pesos", sentencia N° 252).

En otro orden de ideas, cabe resaltar que los Dres. Genaro R. Carrió y Alejandro D. Carrió sostienen que el defecto mencionado habilita el tratamiento del remedio extraordinario deducido. En este sentido enseñan lo siguiente:

"...dentro de lo que hemos llamado el ámbito normal del recurso extraordinario la Corte Suprema no puede rever los siguientes tópicos: a) las cuestiones de hecho, es decir las que conciernen a la determinación de las cuestiones planteadas en la litis y a la apreciación y valoración de la prueba producida; y b) por otro lado, las cuestiones referentes a la interpretación y aplicación de los códigos de fondo, de las leyes locales (provinciales o nacionales) y de las leyes de procedimientos (aunque sean federales). Tal es la regla. (...) Dicha regla reconoce una importantísima excepción. Este libro versa, precisamente, acerca de ella. Porque esa excepción está constituida por las llamadas -por la Corte- sentencias "arbitrarias", o "insostenibles", o "irregulares", o "anómalas", o "carentes de fundamentos suficientes para sustentarlas", o "desprovistas de todo apoyo legal y fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces que las suscriben", etc. (...) Si la sentencia es arbitraria, entonces la Corte puede -más fuerte aún, debe- rever por la vía del recurso extraordinario cuestiones de hecho (apreciadas con arbitrariedad), o la inteligencia (arbitrariamente) dada a códigos de fondo, a leyes locales, a leyes procesales, etc. El ámbito de acción del recurso extraordinario queda así expandido; los límites que acotan el ámbito normal de él quedan eliminados. La revisión de sentencias arbitrarias configura el ámbito excepcional de dicho recurso (235:249; 240:440; 243:11; 243:145; etc.). Su ámbito total está constituido por el ámbito normal más el ámbito excepcional. (...) La existencia de esta expansión del ámbito normal puede ser concebida como una excepción creada por la jurisprudencia de la Corte a las reglas limitativas señaladas más arriba, o bien como una suerte de

²CSJT. "María Angela de Uña de Carletto SH vs. Provincia de Tucumán s. Nulidad y revocación" Sentencia n° 1229. Fecha 03/12/2014.

cuarto inciso del art. 14 de la ley 48, no escrito en el texto de ésta, sino añadido a él por dicha jurisprudencia. Ambas descripciones son equivalentes.”

Lo sustentado por los doctrinarios sirve para tejer un paralelismo con nuestra norma provincial, que regula los supuestos de admisibilidad del recurso extraordinario local.

El fundamento normativo de este supuesto de admisibilidad del recurso está dado por ejemplo – como lo ha marcado la Corte nacional en el precedente “Rey vs. Rocha”- en que el art. 17 de la Constitución Nacional se vería afectado por una sentencia que no esté adecuadamente fundada en ley. También el derecho de defensa en juicio, previsto en el art. 18, que se integra no sólo con la posibilidad de acceder a la justicia, sino además con el derecho a que el litigio concluya con una sentencia que sea una derivación razonada del derecho aplicado a los hechos acreditados en la causa. La sentencia arbitraria también viola el art. 19 de la Carta Magna por cuanto estaría prohibiendo a las partes algo que la ley no prohíbe y obligando a algo sin que exista ley que así lo disponga.

Por los argumentos que a continuación se desarrollan V.E. podrá advertir que en el caso de autos el supuesto de arbitrariedad se encuentra plenamente configurado de modo que corresponde admitir el recurso deducido y remitir estos autos a la Excm. Corte provincial para su estudio.

5.- Arbitrariedad: La sentencia prescinde infundadamente de la ley n° 8851, y su decreto reglamentario, sin declararlo inaplicable y/o inconstitucional.

La sentencia en crisis resuelve condenar a la demandada a liquidar sus haberes previsionales mensuales según lo señalado, a abonarles las diferencias a partir de que quede firme la misma y dentro del PLAZO DEL ART. 80 CPA. Puede advertirse que la sentencia ordena a mi mandante cumplir con la manda judicial en un plazo de treinta días corridos, con cita del art. 80 del Código Procesal Administrativo de Tucumán. Es decir está disponiendo que los montos por los que se condena a mi mandante deberán ser abonados en el término de treinta días corridos.

La ley n° 8851, constituye un sistema de pago ordenado, transparente y previsible de pago de las obligaciones a cargo del Estado reconocidas judicialmente. Dispone, en su artículo 1°, la adhesión de la provincia a las disposiciones de la ley nacional n° 25.973, y al Régimen de Inembargabilidad de los fondos públicos presupuestarios establecidos por leyes nacionales n° 24.624, 25.565 y 11.672 (T.O. 2014) respectivamente, sus normas complementarias y modificatorias, normas éstas que no fueron cuestionadas por la actora, ni declaradas inconstitucionales por la sentencia.

El art. 19 de la Ley n° 24624, por su parte, fue sancionado para imponer pautas racionales en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado y evitar que la Administración pueda verse situada, por imperio de un mandato judicial perentorio, en el trance de no poder satisfacer el requerimiento por no tener los fondos previstos en el presupuesto para tal fin, o en la de perturbar la marcha normal de la Administración Pública, de lo cual no se sigue que el Estado se encuentre fuera del orden jurídico que está obligado a tutelar, ni que esté exento

”Genaro R. Carrió y Alejandro D. Carrió, El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, Tomo I, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, Lexis Nexis On Line, 1995.

Carlos José Laplacette, Recurso Extraordinario Federal. Análisis Teórico y Práctico. Ed. La ley. Página n° 153.

de acatar los fallos judiciales. (Cfr. CSJN en autos "GIOVAGNOLI CESAR AUGUSTTO C/CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO S/ COBRO DE SEGURO" pronunciamiento del 16/9/99 Fallos: 322:2132)

La Ley n° 8851, al adherir al régimen nacional, pretende instaurar en la provincia un mecanismo racional y permanente de pago de deudas públicas judiciales a imagen del establecido en el ámbito nacional. El artículo n° 3 dispone: "Los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Provincial, (...), al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Pública Provincial y hasta su agotamiento, sin perjuicio del mantenimiento de los regímenes de consolidación de deudas previstos en las normas vigentes.

El artículo n° 4 por su parte dispone: "...Los recursos asignados anualmente por el Poder Legislativo de la Provincia se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva."

A su vez el artículo 2° del decreto reglamentario n° 1583/1, regula: "El Registro de Sentencias Condenatorias creado por la Ley 8.851 tomará razón de las Sentencias condenatorias firmes, debiendo elaborar una base de datos bajo estricto orden de antigüedad según la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva. Respecto de las sentencias condenatorias que no requieran planilla, el ingreso a esa base de datos estará determinado por la fecha en que han pasado por autoridad de cosa juzgada formal y material.". Por su parte, el Anexo I del decreto reglamentario establece, de manera precisa, el trámite por el cual se inscribe la sentencia para ser incorporada al proyecto de ley de presupuesto que deberá prever la partida necesaria para afrontar el pago de cada deuda reconocida en sede judicial. De allí surge que una vez que la sentencia queda firme, el trámite para el registro de sentencias se iniciara ante la mesa de entradas de la repartición condenada. La presentación se hará a instancia de acreedor por formulario del ANEXO II y se acompañara la siguiente documentación con copia certificada: a) sentencia condenatoria y regulatoria de la totalidad del proceso, b) cedula de notificación c) planilla de resolución aprobatoria y de cedula de notificación de la resolución que aprueba la planilla. El servicio jurídico, de la repartición condenada, dentro del plazo de 5 días hábiles, deberá analizar la procedencia del pago solicitado y aconsejará, en caso de corresponder, su continuidad previa intervención del SAF del área. Cumplido ello, la repartición lo remitirá al Registro de Sentencias Condenatorias. 3) El Registro de Sentencias Condenatorias controlará los antecedentes, tomará razón de la solicitud - momento en el que se perfecciona la inscripción de la sentencia en el Registro -, y formará un legajo que se reservará en su archivo. Una vez inscripto el trámite, remitirá el expediente a la Secretaría de Estado de Hacienda. 4) La Secretaría de Estado de Hacienda tomará vista del expediente y lo remitirá de inmediato a la repartición de origen...." (Cfr. Puntos 1 a 4 del Anexo I)

A su vez, el primer párrafo del artículo 4 de la ley n° 8851 indica que los formularios de solicitud de pago deberán ser ingresados en Fiscalía de Estado de la provincia hasta el día 31 de Julio de cada año. Posteriormente, hasta el día 31 de agosto de cada año, Fiscalía de Estado debe remitir el detalle de los juicios con sentencia condenatoria a la Secretaría de Hacienda a fin de que esas obligaciones sean incluidas en el proyecto de ley de presupuesto que, conforme al artículo n° 101 inc. 7 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Tucumán debe presentar a la Legislatura de Tucumán hasta el 31 de octubre de cada año.

El mecanismo de pago definido por la provincia de Tucumán, i esto, adhiriéndose al régimen nacional, ha sido implementado exitosamente con la creación del Registro de Sentencias que se encuentra en funcionamiento desde el día 23/05/2016, y se ha cumplido de manera eficiente durante el año 2017, año en el cual se han pagado el 100% de las sentencias inscriptas en el registro.

Como se puede advertir, la ley n° 8851 y su decreto reglamentario, constituyen la concreción normativa del ejercicio de potestades públicas propias del Estado provincial, que hacen a su "autonomía", y que tienen por finalidad conjugar, de manera razonable, el derecho patrimonial individual del acreedor, con inembargabilidad y previsión presupuestaria, procurando que no se puedan embargar aquellos fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria, que resultan indispensables para el regular funcionamiento del Estado, pagar las deudas del Estado de manera ordenada y transparente. Pretende ser un sistema organizado y previsible de pago de las deudas públicas reconocidas en sede judicial.

No obstante que la ley n° 8851 se encuentra plenamente vigente, y resulta aplicable al presente caso, la sentencia recurrida no la aplicó, pero además lo hizo sin dar fundamento para ello.

La CSJT ha tenido la oportunidad de pronunciarse en un reciente precedente sobre esta cuestión en el caso **"Riba Antonio Eduardo vs. Provincia de Tucumán y Otros s. Contencioso Administrativo. Expte. n° 351/14. Sentencia de fecha 20/12/2017.** El máximo tribunal dijo: "La sentencia impugnada, al decidir que "el monto del daño reconocido deberá ser abonado en el término de 30 días corridos desde que quede firme el pronunciamiento (cfr. artículo 80 del Código Procesal Administrativo), y en caso de que tal suma no sea abonada en el plazo señalado, a partir del día siguiente de vencidos los treinta días de aprobada la liquidación, se devengarán intereses conforme tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta su efectivo pago", no se encuentra suficientemente fundada ya que no expresa las razones por las cuales otorga tanto el referido plazo como el apercibimiento, ni bien se advierte que en la ley 8851 (publicada en el B.O. del 29/03/2016) y su decreto reglamentario se prevé un registro de sentencias y el pago de la condena "dentro de las autorizaciones del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Pública Provincial" (art. 3) y que "Fiscalía de Estado realizará un cálculo estimativo de intereses en función de la proyección de la fecha estimativa de pago" (art. 3 decreto 1583/1). El déficit de fundamentación apuntado impide considerar al pronunciamiento impugnado como una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa, por transgredir el deber de motivación que le imponen los arts. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán y 33, 40 y 264 del CPCyC a los que remite el art. 89 del CPA. Tal déficit del fallo determina su descalificación parcial como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia. En virtud de todo lo expuesto, y sin que lo que lo resuelto implique en modo alguno orientar el nuevo 27/12/2017 A351/14 RIBA ANTONIO EDUARDO Y OTROS C/PROVINCIA DE TUCUMÁN S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Base: Sec. Jud. - Contencioso A.. Actualizado en fecha: 26/12/2017 07:52:08 p.m. Escrito: SENTENCIA SOBRE CASACION Impreso: pronunciamiento, corresponde Hacer Lugar al recurso de casación interpuesto y consecuentemente Casar la sentencia impugnada, punto dispositivo II en cuanto dispone que los montos por los que se condena a la demandada deberán ser abonados en el término de 30 días corridos desde que quede firme el pronunciamiento (cfr. artículo 80 del Código Procesal Administrativo), y en caso de que tales sumas no sean abonadas en el plazo señalado, a partir del día siguiente de vencidos los treinta días de aprobada la liquidación, se devengarán intereses

101

conforme tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta su efectivo pago, sin expresar las razones por las cuales no aplica la ley 8851 ni su Decreto Reglamentario, en base a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y, por ende, nula, la sentencia que sin fundamentos determina la tasa de interés aplicable y el plazo para el pago de una sentencia condenatoria contra el Estado Provincial, sin expresar las razones por las cuales no sería aplicable la ley 8851 y su Decreto Reglamentario".

El precedente transcripto resulta ser plenamente aplicable a estos autos, además de ser sumamente categórico y reciente (de fecha 20/12/2017).

Por su parte La CSJN en una extensa línea de precedentes iniciada con el leading case "Izdi" de 1957 ha acuñado el siguiente principio: "una sentencia es arbitraria si en ella se prescinde de una norma obviamente aplicable al caso, sin dar razón plausible alguna para ello."

El decisorio recurrido no sólo prescinde del texto de la ley n° 8851, sino que resolvió en contra de lo dispuesto por esa norma. Pero, además, lo hizo sin dar fundamento alguno para ello.

Para el presente punto propongo me remito a la doctrina legal citada, y propongo, además, la siguiente:

"Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que, sin declarar inconstitucional y/o inaplicable la ley n° 8851, ordena al Estado provincial cumplir con el pago de una obligación reconocida en sede judicial, sin observar el mecanismo de pago dispuesto en esa norma."

6. Mantenimiento del planteo de "cuestión federal"

Como consecuencia de las reglas procesales que imperan respecto del recurso previsto en el art. 14 de la ley nacional 48, en tiempo y forma oportunos, mantengo planteo respecto de la existencia de CASO FEDERAL oportunamente esgrimido al contestar demanda.

Una sentencia en contra de los intereses propugnados por el Estado provincial importaría, no sólo la consagración de una "*sentencia arbitraria*" con clara vulneración de los arts. 17, 18 y 33 de la CN, sino la vulneración de la organización administrativo-financiera del Estado provincial demandado. Materia de derecho público local en ejercicio de la garantía institucional de autonomía provincial (Cf. Arts. 1, 5, 121-123, CN).

7. Petitorio

Por todo lo expresado en párrafos precedentes, a V. E. pido:

a) Que, con la representación judicial invocada, tenga por interpuesto en tiempo y forma propicios el RECURSO DE CASACIÓN contenido en este escrito respecto de la SENTENCIA del 23-03-18.


b) Que, a los fines de la admisibilidad del recurso interpuesto, estime cumplidas las condiciones necesarias exigidas por los arts. 748 a 752 del CPCCT. Que, en su

oportunidad, disponga elevar las actuaciones a la CSJT para el tratamiento y resolución de la procedencia del recurso formulado.

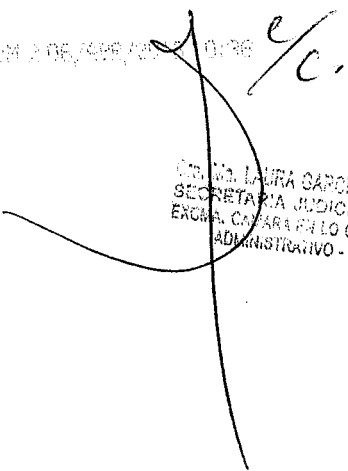
c) Que estime esgrimida en tiempo y forma idóneos el planteo respecto de la existencia de CASO FEDERAL en cumplimiento de la carga que rodea la admisión del recurso previsto en el art. 14 de la LN 48.

d) Que, por último, como resultado de los argumentos desarrollados, dada la arbitrariedad y la gravedad institucional invocadas, estime procedente el recurso interpuesto – así como la imposición de costas derivado de ella- y revoque la decisión judicial materia de agravio.

Justicia.


MIRTA ADRIANA AVILA
ABOGADA
MAT. PROF. 2819-Tº 95-Fº 243
FISCALIA DE ESTADO

DOM. CUAL. NEM. 2 DE ABRIL DE 2016


DRA. LAURA CAPORA LIZARRAGA
SECRETARIA JUDICIAL CAT. "A"
EXCM. CAMARA EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SALA II